



Consejo de Seguridad

Distr. general
8 de septiembre de 2020
Español
Original: inglés

La situación en Sudán del Sur

Informe del Secretario General

I. Introducción

1. El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 2514 (2020) del Consejo de Seguridad, por la que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) hasta el 15 de marzo de 2021 y me solicitó que proporcionara información al Consejo, cada 90 días, sobre la ejecución del mandato por parte de la Misión. El informe abarca la evolución de la situación política y de seguridad entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2020, la situación humanitaria y de los derechos humanos y los progresos obtenidos en la ejecución del mandato de la Misión.

II. Evolución de la situación política y económica

2. El 17 de junio, el Presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el Vicepresidente primero, Riek Machar, llegaron a una decisión sobre la distribución de las cargas y responsabilidades de los puestos estatales y de gobernadores, con lo que se ponía fin a tres meses de dilaciones en las asignaciones de los estados. Ecuatoria Central, Ecuatoria Oriental, Lagos, Bahr el-Ghazal Septentrional, Warrap y Unidad fueron asignados al actual Gobierno de Transición de Unidad Nacional; las regiones del Alto Nilo, Bahr el-Ghazal Occidental y Ecuatoria Occidental fueron asignados al Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (M/ELPS-O); y Yonglei fue asignado a la Alianza de Oposición de Sudán del Sur. A la coalición Otros Partidos Políticos no se le asignó un estado, como se prevé en el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, en el que se había garantizado a la coalición el 8 % de los puestos.

3. El 29 de junio, el Presidente designó a los gobernadores de ocho de los diez estados y a los administradores principales para las zonas administrativas de Abyei, Pibor y Ruweng. El 17 de julio se designó al gobernador de Yonglei, decisión a la que se opuso el Movimiento Democrático Nacional (miembro de la Alianza de Oposición de Sudán del Sur) argumentando que con ello se les impedía una vez más participar en el Gobierno de Transición de Unidad Revitalizado, ya que no se había tomado en consideración a su candidato. El puesto de gobernador del Alto Nilo sigue vacante debido a un desacuerdo en torno al nombramiento del teniente general Johnson Olony, a quien el Presidente se negó a instalar en el cargo.



4. Pese a que el Acuerdo Revitalizado exige una presencia del 35 % de mujeres en todas las instituciones de gobierno, solo una mujer, designada por el M/ELPS-O, fue nombrada gobernadora. El 2 de julio, las mujeres dirigentes emitieron un comunicado dirigido al Presidente en el que instaban a los partidos a que se atuvieran a la cuota del 35 %.

5. El 10 de agosto, un comité de alto nivel sobre la formación de los gobiernos estatales y locales informó de que las partes habían llegado a un acuerdo sobre diez gobernadores de estado (uno de ellos una mujer) y sus adjuntos, diez presidentes de asambleas estatales y sus adjuntos y 79 puestos de comisionado de condado. Las partes también consensuaron 35 consejos de condado, 17 ministros, 51 miembros de asambleas estatales, 5 asesores estatales, 6 presidentes y 6 diputados de comisión, así como ocho comités especializados en cada estado. Se confió a los gobernadores la responsabilidad de nombrar a los alcaldes, sus tenientes de alcaldía y los secretarios generales.

6. Como consecuencia de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), la actividad política siguió siendo limitada. El Vicepresidente primero y el Vicepresidente, James Wani Igga, reanudaron sus funciones junto con otros miembros del gabinete que previamente habían dado positivo por COVID-19. Esto, sin embargo, no conllevó un retorno a la plena normalidad de las actividades del Gobierno, puesto que las restricciones debidas a la pandemia impidieron el contacto continuado entre las partes, los interesados y los mediadores. Pese a los esfuerzos desplegados para emplear modos de interacción virtuales, las dificultades técnicas y de organización supusieron un obstáculo para esas iniciativas.

Aplicación del Acuerdo Revitalizado

7. La Junta de Examen Estratégico de la Defensa y la Seguridad no avanzó hacia un marco más general para la reforma del sector de la seguridad, en particular en relación con las visiones, tamaños, composiciones y presupuestos del ejército nacional, el servicio de seguridad y otras fuerzas organizadas, como se prevé en el Acuerdo Revitalizado.

8. El progreso en la aplicación de los acuerdos transitorios de seguridad ha sido escaso, y no se han cumplido los planes para formar, graduar y desplegar las fuerzas unificadas necesarias. Los centros de adiestramiento y los acantonamientos siguieron abandonados por las fuerzas, como consecuencia de la falta de alimentos, agua, medicamentos y servicios esenciales. La mayoría de las fuerzas gubernamentales no formaban parte todavía del proceso de unificación y permanecían en barracones de todo el país, mientras que los partidos de la oposición enviaron una parte importante de sus fuerzas a esos centros y emplazamientos.

9. Los días 13 y 14 de julio, la Junta Mixta de Defensa organizó un curso práctico sobre la reestructuración de los órganos de seguridad, el ejército, la policía, las prisiones, el Servicio de Seguridad Nacional, el servicio de vida silvestre y el cuerpo de bomberos. El 11 de agosto, la Junta presentó las estructuras de mando armonizadas de las fuerzas unificadas necesarias al Comité Nacional de Transición.

10. Las actividades del Comité Nacional de Reforma Constitucional siguieron aplazándose debido a las restricciones impuestas por la COVID-19. Asimismo, los retrasos en la reconstitución de la Asamblea Legislativa Nacional de Transición impidieron el examen y la aprobación de leyes necesarias.

Evolución del proceso de paz

11. El 19 de agosto, el grupo temático sobre gobernanza presidido por el Vicepresidente primero deliberó sobre todas las tareas pendientes y sobre las

repercusiones de la pandemia en la aplicación del Acuerdo Revitalizado. El grupo temático decidió que todas las tareas pendientes y programadas se prorrogarían por un período de seis meses.

12. El vacío de poder a nivel subnacional resultante de las demoras en el nombramiento de los gobernadores de los estados contribuyó a un incremento en las tensiones y los enfrentamientos violentos entre las comunidades, lo que puso en peligro los avances del Acuerdo sobre el Cese de las Hostilidades entre el Gobierno de la República de Sudán del Sur y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición. El 4 de junio, el Viceministro del Interior Mabior Garang de Mabior renunció a su cargo, citando entre otros motivos el deterioro de la situación de la seguridad en todo Sudán del Sur, que atribuyó al hecho de que las partes no hubieran aplicado el acuerdo de paz.

13. El 23 de junio, el Presidente nombró un comité de alto nivel para investigar la situación de la seguridad en Yonglei y la Zona Administrativa de Pibor. Al comité, encabezado por el Vicepresidente, se le encomendó la tarea de entablar contactos con los ancianos de la comunidad y con otros interesados a fin de poner coto a la violencia entre comunidades. Se espera que el comité organice una conferencia de paz para que las comunidades interesadas lleguen a un acuerdo.

14. El 9 de julio, en un discurso pronunciado con ocasión del Día de la Independencia, el Presidente expresó su preocupación por el aumento de la violencia entre comunidades y dentro de ellas, y añadió que el Gobierno iniciaría un diálogo con las comunidades afectadas y emprendería un desarme completo de la población civil, asegurando al mismo tiempo la participación y representación de los grupos marginados en el Gobierno.

15. El 14 de julio, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) celebró por medios virtuales su 36ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno. Los líderes regionales apelaron al Presidente para que disolviera la Asamblea Legislativa Nacional de Transición antes del 26 de julio y la reconstituiera en un plazo de siete días a partir de la disolución. También pidieron al Gobierno que adoptara medidas correctivas para rectificar las modificaciones introducidas en el proyecto de ley por la que se modifica la Constitución, y que proporcionara recursos para completar los acuerdos transitorios de seguridad inconclusos. En el caso de que tras el 13 de agosto quedasen todavía tareas pendientes previas a la transición, los dirigentes regionales decidieron que la Presidencia de la IGAD (se actualizará) entablaría contactos directos con las partes para contribuir a la conclusión de las cuestiones pendientes.

16. El 16 de agosto, el general de división Charles Tai Gituai sustituyó al teniente general (retirado) Augustino Njoroge en la Presidencia Provisional de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida. La Presidencia de la Comisión no ha tenido un titular permanente desde que Festus Morgae cesara en su cargo en septiembre de 2018.

17. El 31 de agosto, el Presidente presidió en Yuba la ceremonia de firma de un acuerdo de paz preliminar entre el Gobierno de transición del Sudán y el Frente Revolucionario Sudanes.

Situación económica

18. La economía de Sudán del Sur sigue afrontando dificultades fiscales derivadas de los bajos precios del petróleo en los mercados mundiales y de las medidas de respuesta a la COVID-19, que provocaron una reducción de los ingresos no petroleros. La enfermedad por coronavirus también ha afectado negativamente a las pequeñas empresas, mientras que los conflictos entre las comunidades y en el seno de

ellas y las inundaciones en algunas zonas han reducido las oportunidades de subsistencia. Además, el Gobierno vio reducida su capacidad para financiar el proceso de paz y reaccionar fiscalmente ante las repercusiones sanitarias y socioeconómicas de la COVID-19.

III. Situación de la seguridad

19. La situación de la seguridad se deterioró a nivel subnacional, después de que estallaran complejos conflictos entre grupos étnicos cuyas actividades se rigen por alianzas cada vez más inestables y por campañas de seguridad específicas. Múltiples zonas de Yonglei, Lagos, Unidad, Warrap y Bahr el-Ghazal Occidental se han visto gravemente afectadas por conflictos localizados dirigidos contra objetivos muy diversos en los que han participado civiles y combatientes uniformados, y a los que interesados del país han prestado apoyo a distintos niveles.

20. Si bien se espera que con el nombramiento de gobernadores de los estados se pondrá freno a algunas de estas tensiones, los desencuentros políticos y étnicos siguen impulsando el conflicto a escala subnacional. Las campañas de desarme que se están llevando a cabo en Lagos y Warrap para contener la violencia localizada han generado preocupaciones adicionales de seguridad, entre las que destaca el aumento de la inseguridad en Tonj Este. Asimismo, dada la falta de avances en la mediación con los no signatarios del Acuerdo Revitalizado, el conflicto con el Frente de Salvación Nacional ha continuado, bien es cierto que en otra ubicación geográfica, pero con las mismas tácticas y los mismos niveles de intensidad.

21. El inicio de la temporada de lluvias ha hecho poco para contener la violencia localizada. Los frecuentes repuntes son indicativos de lo volátil de las condiciones de seguridad, y de la incapacidad de la capital para negociar con medios no violentos las relaciones con la periferia.

Región del Alto Nilo

22. La situación en la región de Yonglei siguió siendo preocupante, como consecuencia de cuatro eventos interrelacionados que han sacudido la zona. En primer lugar, un grupo de las comunidades dinka bor y gawaar nuer avanzó desde Bor durante la primera semana de junio y tomó rápidamente Manyabol y Gumuruk. El grupo permaneció activo, en particular en las zonas al sur de Pibor, durante todo el mes de julio y parte de agosto. En segundo lugar, otros grupos de la comunidad lou nuer se movilizaron y se sumaron a los enfrentamientos a finales de julio, lo que provocó un repunte en el número de desplazados y una creciente preocupación por un posible ataque contra Pibor. Sin embargo, los grupos se retiraron a Akobo y otras partes del norte de Yonglei a principios de agosto. En tercer lugar, la inseguridad en la región de Yonglei se ha visto afectada por los continuados ataques de la comunidad murle en zonas ocupadas por los dinka y los nuer. Por último, alrededor del 22 de julio, más de 1.000 jóvenes dinka bor armados llegaron en barcas a Ecuatoria Central, primero, y posteriormente a Ecuatoria Oriental, y desde ellas amenazaron a las comunidades murle desplazadas en la parte meridional de la Zona Administrativa de Pibor. Tanto su llegada como las amenazas proferidas estuvieron bien organizadas, y presuntamente contaban con el apoyo de fuerzas uniformadas de todas las partes. Hacia mediados de agosto, la mayoría de los grupos se habían de la Zona Administrativa de Pibor y habían emprendido el regreso a sus regiones de origen. A medida que se estabilice la situación de la seguridad y se permita el acceso a la zona, se irán conociendo más detalles sobre la escala y las repercusiones de los casi dos meses de conflicto en la Zona Administrativa de Pibor.

23. En Unidad, los ciclos de robo de ganado y subsiguientes ataques en represalia continuaron, en un contexto político y de seguridad cada vez más precario. Si bien las incursiones de las milicias de Mayom alineadas con el Gobierno hacia las zonas circundantes disminuyeron tras la intervención del recién nombrado gobernador Joseph Nguen Monytil, los ataques en represalia persistieron, especialmente a lo largo de la frontera de Warrap. Del mismo modo, continuaron los enfrentamientos de baja intensidad en las zonas central y meridional de Unidad, donde las relaciones entre las fuerzas uniformadas del M/ELPS-O y distintos grupos juveniles armados son cada vez más tensas. Se han registrado varios incidentes de enfrentamientos entre las fuerzas del M/ELPS-O y grupos juveniles organizados en Leer, Mayendit y Panyijiar. Ha habido también varios incidentes en los que las fuerzas uniformadas del M/ELPS-O de Guit presuntamente atacaron cuatro aldeas en la Zona Administrativa de Ruweng, lo que motivó un contraataque de las milicias de Pariang contra una posición ocupada por el M/ELPS-O.

24. En Maban, en la región del Alto Nilo, las tensiones en el seno del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (ELPS-N), motivadas por la desertión del comandante Adam Magazi, se extendieron a los campamentos de refugiados y provocaron un considerable aumento de la actividad de las fuerzas armadas, que incluyó enfrentamientos con la milicia mabanesa y la ocupación de una escuela por las fuerzas de la facción de Malik Agar del ELPS-N. A principios de agosto, esas fuerzas se retiraron al Sudán, pero persiste el temor de que sigan activas en los campamentos de refugiados.

25. El nombramiento del teniente general Johnson Olony como gobernador en el Alto Nilo exacerbó las tensiones entre las comunidades shilluk y padang dinka. Se observaron diversas disputas localizadas, desde la sustitución de los nombres de aldeas shilluk con nombres dinka hasta enfrentamientos violentos por caladeros, pasando por el uso de armamento pesado y el movimiento de fuerzas. Las tensiones también aumentaron tras el asesinato del fiscal de Malakal, perteneciente a la comunidad shilluk y hermano de Lam Akol, líder del Movimiento Democrático Nacional.

Región de Ecuatoria

26. En junio, las tensiones en las áreas meridionales de Ecuatoria Central remitieron. Sin embargo, hacia finales de julio y durante todo agosto se tuvo noticia de nuevos enfrentamientos entre el Frente de Salvación Nacional y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur en torno a las zonas de extracción aurífera de Lobonok, que se extendieron hacia Yuba y llegaron hasta Ecuatoria Oriental. La actividad del Frente de Salvación Nacional y de fuerzas opuestas a este se trasladó en gran medida a la zona de Mundri, en Ecuatoria Occidental, tras una campaña de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur a finales de mayo que desplazó al Frente de las zonas en torno a Yei, Lainya y Wonduruba en Ecuatoria Central. A finales de julio, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur renovaron sus esfuerzos para desalojar al frente de Salvación Nacional de las bases cercanas a Kedibo, mientras que el Frente lanzó una serie de ataques en carreteras, con los que interrumpió el enlace clave con Yuba, y amenazó la base del M/ELPS-O de la zona.

27. Las tensiones y los enfrentamientos en Ecuatoria Occidental siguieron vinculados a la división interna del M/ELPS-O y a las divisiones étnicas. El general de división James Nando, que había desertado a principios de 2020, estuvo implicado en el reclutamiento y entrenamiento de jóvenes azandes, en particular en la zona de Tambura. El 18 de julio, un alto dirigente del M/ELPS-O de Balanda, el general de brigada Santo Ali, fue asesinado por la milicia azande en las afueras de Tambura. Las tensiones disminuyeron después de que el Gobierno interviniera ordenando el regreso

de Nando a Yuba. Sin embargo, es probable que la animosidad interétnica latente, junto con la rivalidad personal entre Nando y el recién nombrado gobernador del M/ELPS-O, el teniente general Alfred Futiyo, resulte en una mayor inseguridad.

Región de Bahr el-Ghazal

28. El reclutamiento y despliegue de fuerzas de desarme en Lagos y Warrap dominó el contexto de seguridad en la región. Se observó un repunte de la violencia entre comunidades antes del proceso de desarme, debido a los temores de que el desarme fuese selectivo y partidista. Los vínculos entre los altos funcionarios de seguridad y sus zonas de origen en territorio dinka exacerbaron las percepciones de que se estaban manipulando las dinámicas entre comunidades con el fin de alcanzar objetivos políticos a escala nacional. Estas preocupaciones quedaron patentes a mediados de junio, cuando una combinación de fuerzas de seguridad del Gobierno y jóvenes armados asesinaron a un destacado *gelweng* (jóvenes dinka organizados para proteger el ganado), el empresario y líder del movimiento 7 de Octubre Kerubino Wol. Del mismo modo, los días 8 y 9 de agosto se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de desarme y los jóvenes armados en Romich, en Tonj Este, en los que más de 140 personas perdieron la vida.

29. Se registraron tensiones relacionadas con el despliegue de las fuerzas de desarme en Bahr el-Ghazal Occidental tras la fallida emboscada que el M/ELPS-O quiso tender al convoy del jefe de las fuerzas de desarme, teniente general Riin Tueny. Posteriormente, uno de los comandantes del M/ELPS-O, el general de brigada Bol Wek, fue detenido junto con 11 soldados por las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur. Como represalia, el M/ELPS-O secuestró a nueve civiles. El 19 de agosto, las intervenciones del Gobierno, con el apoyo del Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad y la UNMISS, posibilitaron el intercambio de rehenes y pusieron fin al enfrentamiento.

Conflictos entre comunidades

30. La violencia entre comunidades se recrudeció en todo el país, en particular en Yonglei, Lagos, Unidad, Warrap y Bahr el-Ghazal Occidental. La dinámica del conflicto en la región de Yonglei, en la que los ataques conjuntos de los *lou nuer-dinka* contra las comunidades *murle* en la Zona Administrativa de Pibor resultan en ataques de represalia de los *murle* a las zonas de los *lou nuer*, dejaron decenas de muertos y miles de desplazados. En Tonj, en la región de Warrap, el enfrentamiento armado entre dos subsecciones dinka motivó el despliegue de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur para prevenir nuevos episodios de violencia.

IV. Situación humanitaria

31. La persistente violencia entre comunidades, la pandemia y las inundaciones estacionales siguieron siendo el motor principal de las necesidades humanitarias en Sudán del Sur. En Yonglei y la Zona Administrativa de Pibor, los enfrentamientos entre grupos juveniles armados provocaron el desplazamiento interno de más de 150.000 personas, y en la zona adyacente a la base de la UNMISS en Pibor se prestó protección física a 7.000 desplazados. El conflicto armado en Ecuatoria Central y Occidental y en Warrap también provocó el desplazamiento de miles de civiles.

32. En un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases publicado en febrero 2020, se preveía que, el hambre afectaría a casi 6,5 millones de personas en Sudán del Sur entre mayo y julio de 2020. Se estima que aproximadamente 1,75 millones de personas en 33 condados se encuentran en situación de inseguridad alimentaria de emergencia (fase 4 de la Clasificación

Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases), más de una cuarta parte de ellas en Yonglei, un área afectada por la violencia entre comunidades. Además, 4,7 millones de personas en 37 condados están expuestas a una posible crisis de inseguridad alimentaria (fase 3 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases). La presencia de langostas del desierto en varios condados de Ecuatoria Oriental agravó las amenazas existentes.

33. Más de 1,6 millones de personas seguían desplazadas internamente, mientras que otros 2,2 millones de personas buscaron refugio en cinco países vecinos. El número de desplazados internos se redujo ligeramente debido al regreso de los desplazados a sus hogares y al cierre de algunos asentamientos de desplazados. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en junio, más de 11.000 refugiados regresaron espontáneamente, con lo que el número de repatriados en 2020 supera las 65.000 personas.

34. La inseguridad generalizada obstaculizó la evaluación y la respuesta humanitarias y en algunos casos redujo el impacto de las operaciones o provocó la suspensión de estas. Las restricciones a los viajes relacionadas con la COVID-19, incluidos los cierres de fronteras, las políticas de cuarentena y las restricciones de visados, siguieron afectando a la movilidad del personal humanitario y a su respuesta general. Con el inicio de la temporada de lluvias, las inundaciones en Unidad y Yonglei afectaron a más de 500.000 personas, mientras que lo impracticable de las carreteras planteó importantes problemas para las operaciones de las organizaciones humanitarias. El saqueo de los suministros durante la violencia subnacional siguió siendo un impedimento importante para la respuesta humanitaria. En total se registraron diez incidentes de saqueos, en comparación con uno en el mismo período del año precedente. En Ecuatoria Oriental, el personal humanitario sufrió numerosos episodios de robos y violencia en las principales carreteras. A principios de agosto, un convoy de una organización no gubernamental (ONG) internacional compuesto por dos vehículos fue emboscado por un grupo armado desconocido en la carretera de Yei-Lasu, en Ecuatoria Central.

35. Se informó de un mayor número de incidentes relacionados con el acceso humanitario. En junio y julio del presente año se registraron un total de 87 incidentes, en comparación con los 86 registrados en el mismo período de 2019. En junio, la violencia subnacional en Yonglei motivó la reubicación de 66 trabajadores humanitarios. El 28 de junio, una ambulancia claramente identificada como tal que transportaba a un herido a un hospital recibió disparos en Lagos, de resultas de los cuales falleció el conductor, miembro del personal nacional de una ONG internacional. El 13 de julio, dos trabajadores humanitarios que prestaban servicios de atención de la salud y nutrición a miembros de la comunidad en la ciudad de Pajut, en Yonglei, fallecieron durante el ataque lanzado sobre la ciudad por un grupo armado desconocido, con lo que el número de trabajadores humanitarios asesinados en Sudán del Sur desde que estallara el conflicto en 2013 asciende a 122.

36. A través del Plan de Respuesta Humanitaria correspondiente a 2020, a finales de junio fue posible proporcionar asistencia y servicios de protección vitales a aproximadamente 5,1 millones de personas, lo que corresponde al 69 % de los 7,4 millones de personas previstas, incluidas aquellas a las que se proporcionó asistencia a través de las actividades de respuesta a la COVID-19. Al 21 de agosto, según el Servicio de Seguimiento Financiero, se habían asegurado 617 de los 1.900 millones de dólares de los Estados Unidos solicitados en el plan de respuesta humanitaria. La solicitud de financiación se revisó en junio a fin de reflejar las nuevas necesidades. En la adición relativa a la COVID-19 del plan de respuesta humanitaria se solicitaron 390 millones de dólares adicionales, con lo que, en conjunto, el llamamiento humanitario pasó de 1.500 a 1.900 millones de dólares.

37. Al 30 de agosto, 2.527 personas habían dado positivo en las pruebas de COVID-19 y se habían registrado 1.293 recuperaciones y 47 muertes, según el Ministerio de Salud de Sudán del Sur. Las Naciones Unidas y sus asociados siguieron prestando apoyo a las actividades de prevención y preparación relativas a la COVID-19 dirigidas por los países, en particular en las esferas de la vigilancia, la coordinación asistencial, la prevención y control de las infecciones, la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad, y los servicios de agua, saneamiento e higiene en los planos nacional, estatal y comunitario. Hacia principios de agosto, se había proporcionado un mejor acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene a 2,24 millones de personas; 4,1 millones de personas recibieron asistencia en forma de alimentos o medios de subsistencia y transferencias de efectivo; 1,1 millones de personas accedieron a consultas médicas; más de 800.000 personas recibieron servicios de protección, como protección infantil y apoyo en casos de violencia de género; y más de 600.000 personas recibieron alojamiento de emergencia y artículos de socorro no alimentarios.

V. Ejecución de las tareas encomendadas a la Misión

A. Protección de los civiles

38. La UNMISS siguió velando por la protección de la población civil, tanto dentro como fuera de los emplazamientos de protección de los civiles. Entre las principales amenazas se contaban los asesinatos, los secuestros, la violencia sexual y el saqueo de bienes civiles, entre otras violaciones. Estas se producían predominantemente durante los enfrentamientos intercomunitarios entre grupos armados de jóvenes en Yonglei y la Zona Administrativa de Pibor. La UNMISS respondió a las amenazas a varios niveles, valiéndose para ello de un enfoque integrado. Los dirigentes de la Misión siguieron ejerciendo sus buenos oficios y mantuvieron un contacto constante con altos funcionarios del Gobierno de Yuba.

39. En el plano subnacional, la UNMISS prestó su apoyo al Consejo de Iglesias de Sudán del Sur, a la sociedad civil, a las mujeres dirigentes y a las autoridades locales, para fomentar el diálogo con los dirigentes comunitarios dinka, lou nuer, gawaar nuer y murle, a fin de hacer frente a la violencia entre comunidades. De este modo fue posible relajar las tensiones entre los distintos dirigentes, aumentó el intercambio de información sobre la movilización de los jóvenes y se elaboraron estrategias para disuadir a los jóvenes de seguir recurriendo a la violencia.

40. Paralelamente, la fuerza de la UNMISS estableció varias bases temporales de operaciones, organizó patrullas de fomento de la confianza en las principales zonas afectadas por la violencia, como Manyabol, Likuangole y Gumuruk, y junto con la policía de las Naciones Unidas reforzó su presencia en Pibor a fin de proporcionar protección física a 7.000 civiles desplazados que buscaban protección en la zona adyacente a la base de la UNMISS. Mediante el suministro de activos aéreos a una ONG internacional, la UNMISS proporcionó un apoyo determinante a la evacuación de 17 civiles gravemente heridos desde Pieri a un hospital en Bentiu.

41. En Warrap, la UNMISS apoyó la aplicación del revitalizado acuerdo de Marial Bai, que establece normas para la trashumancia desde Warrap a Bahr el-Ghazal Occidental. La Misión organizó campañas de sensibilización en ocho zonas fronterizas entre los dos estados y obtuvo compromisos en virtud de los cuales las partes se abstendrían de acciones que pudieran poner en peligro el acuerdo. Al mismo tiempo, la fuerza de la UNMISS estableció una base temporal de operaciones en Tonj, a fin de mostrar una postura firme y proactiva con la que infundir confianza, poner coto a la violencia entre comunidades y proteger a los civiles. En la región de

Ecuatoria, la UNMISS realizó patrullas integradas de corta y larga distancia en las zonas afectadas por los enfrentamientos entre el Frente de Salvación Nacional y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur.

42. En el contexto de la protección de los civiles y en apoyo de la aplicación del proceso de paz en las comunidades, la UNMISS organizó seis talleres, diálogos comunitarios y campañas de paz. La Misión centró sus esfuerzos en actividades de creación de capacidad para las autoridades tradicionales, las mujeres y los jóvenes y difundió copias de los acuerdos de paz locales y nacionales, y se trabó contacto con un total de 692 personas (entre ellas 312 mujeres). El alcance de estas actividades siguió viéndose limitado como consecuencia de las restricciones relacionadas con la COVID-19.

43. En vista de los cambios en el contexto operativo, la UNMISS realizó evaluaciones de los riesgos para la seguridad de los emplazamientos de protección de los civiles en Bor y Wau. Esas evaluaciones indicaron que no existen amenazas externas identificadas para los desplazados internos de esos emplazamientos. En consecuencia, la Misión hizo disposiciones para cambiar la designación de los campamentos y transferir al Gobierno las responsabilidades sobre la administración de estos, incluidas las de policía y seguridad, de conformidad con el capítulo III del Acuerdo Revitalizado. Con los cambios, la Misión ha conseguido mejorar la eficiencia y aumentar su huella protectora más allá de los emplazamientos de protección de civiles mediante el redespiegue de fuerzas.

44. Los cambios graduales de postura dieron lugar a reducciones significativas en los despliegues de unidades de policía constituidas de la fuerza de la UNMISS y de las de la policía de las Naciones Unidas para tareas estáticas alrededor de los emplazamientos de protección de civiles en Wau y Bor. La fuerza de la UNMISS mantiene patrullas alrededor del perímetro externo de los emplazamientos con una fuerza de reacción rápida capaz de desplegarse de inmediato. Los grupos de vigilancia comunitaria gestionan actualmente el control de acceso de peatones y los programas de vigilancia dentro de los emplazamientos, y comunican cualquier preocupación a la policía de las Naciones Unidas para que esta adopte medidas de seguimiento, incluido el despliegue de unidades de policía constituidas en caso necesario. La Misión ha mantenido la prestación de servicios de seguridad a las actividades humanitarias en los emplazamientos de protección de los civiles.

45. En previsión del cambio en la designación de los emplazamientos de protección de civiles, que albergan todavía a 170.000 personas, la Misión emprendió una planificación conjunta con los agentes humanitarios en los emplazamientos de protección de los civiles de Bor y Wau y preparó una estrategia habilitadora para apoyar la seguridad y la protección continuadas de los campamentos. Las medidas incluían arreglos de transición, como los correspondientes a la coubicación de la policía de las Naciones Unidas y, en caso necesario, la mejora de la capacidad de apoyo del Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur en materia de aplicación de la ley y administración de justicia.

46. La policía de las Naciones Unidas siguió ampliando la posición y la huella de sus actividades de protección más allá de los emplazamientos de protección de civiles como iniciativa prioritaria de intervención operacional, centrándose en la disuasión y la mitigación de la violencia contra los civiles, la mejora de la confianza y la seguridad y el fomento de un entorno seguro. Se realizaron un total de 113 patrullas de fomento de la confianza, 32 patrullas de corta duración, 11 patrullas de larga duración, 15 patrullas aéreas dinámicas y 238 patrullas de alta visibilidad.

47. La fuerza de la UNMISS realizó 27.030 patrullas, entre ellas 784 de corta duración, 99 de larga duración, 139 patrullas aéreas dinámicas y 13 patrullas fluviales.

Estado de derecho y rendición de cuentas

48. La UNMISS siguió facilitando la aplicación a nivel nacional de medidas de rendición de cuentas en relación con diversos incidentes relacionados con la seguridad que afectaron a los emplazamientos de protección de civiles. En total, 13 personas sospechosas de haber sido responsables de graves incidentes relacionados con la seguridad en los emplazamientos de Yuba, Bentiu y Malakal permanecían recluidas en centros de detención de la UNMISS. La UNMISS remitió ocho casos a las autoridades nacionales para su investigación y enjuiciamiento.

49. La UNMISS siguió prestando apoyo a los agentes de justicia a nivel nacional y estatal para aliviar el hacinamiento en las cárceles y los lugares de detención a fin de promover las medidas de prevención y respuesta fundamentales ante la COVID-19, y a tal efecto elaboró un instrumento de coordinación y promoción. La Misión también financió e inició un proyecto de costura en la Prisión Central de Yuba para fabricar 10.000 mascarillas no quirúrgicas para prisioneros y personal penitenciario. La UNMISS está tratando de reforzar la preparación de los hospitales de los servicios de seguridad frente a la amenaza de la COVID-19 mediante el suministro de equipos básicos de protección personal (EPP), aprovechando así estas instituciones para reducir la carga para las instituciones civiles y potenciar sus esfuerzos de respuesta. Se ha llevado a cabo una evaluación de las necesidades básicas de cinco hospitales de servicio (tres del Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur; uno del Servicio Penitenciario de Sudán del Sur; y uno de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur). Se están evaluando las posibilidades de financiación.

50. Para mitigar la violencia relacionada con la migración en Warrap y Bahr el-Ghazal Occidental, la UNMISS, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y World Vision, puso en marcha un proyecto de dos años financiado por el fondo fiduciario de reconciliación, estabilización y resiliencia. En respuesta a la exigencia de rendición de cuentas por parte de la comunidad, recogida en un comunicado del 18 de junio, el componente dirigido por la UNMISS se centrará en la promoción de la rendición de cuentas por delitos graves relacionados con la migración, en particular prestando apoyo al establecimiento de un tribunal especial móvil, un mecanismo previsto en la legislación nacional en el que los dirigentes tradicionales actúan como asesores de los jueces estatutarios, y facilitando su despliegue como mecanismo de respuesta rápida ante brotes de violencia.

51. En el contexto del respaldo a la aplicación del Acuerdo Revitalizado, el 23 de junio la UNMISS prestó apoyo al Comité Mixto encargado de los Arreglos Transitorios de Seguridad proporcionando material pedagógico a los instructores del ejército, la policía, el servicio penitenciario, los servicios de vida silvestre y el cuerpo de bomberos. La UNMISS también prestó asesoramiento técnico a las reformas de supervisión previstas en el Acuerdo Revitalizado. En junio, la UNMISS aprovechó su presidencia de la reunión ordinaria del grupo de trabajo sobre gestión de las finanzas públicas para convocar a los asociados para el desarrollo y a los representantes de la comunidad diplomática, a fin de examinar el posible apoyo a los comités técnicos y de supervisión establecidos por el Ministerio de Finanzas. La UNMISS examinó el mandato de esos comités y presentó observaciones respecto de sus mandatos, con el ánimo de alentar una mayor participación de la sociedad civil y asegurar que las reformas de la gestión de las finanzas públicas (incluido el fortalecimiento institucional de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Cámara Nacional de Auditoría) se ajustan al capítulo IV del Acuerdo Revitalizado y a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. La Misión también siguió prestando apoyo a la unidad de inteligencia financiera y puso en marcha un análisis de las deficiencias del marco jurídico nacional de lucha contra el blanqueo de dinero.

52. A fin de promover reformas fundamentales relacionadas con el proceso de paz, la UNMISS está llevando a cabo un examen del marco de derecho penal de Sudán del Sur, y ha ofrecido asesoramiento técnico, en particular en relación con el cumplimiento de las normas y las mejores prácticas internacionales y regionales y la armonización de todos los códigos penales nacionales. Se está llevando a cabo un examen de la Ley de Interpretación de Leyes y Disposiciones Generales, de 2006, para garantizar que la legislación se interpreta y aplica de manera clara y coherente. En coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Misión también está prestando asesoramiento técnico al Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social sobre la elaboración de un proyecto de ley de familia para Sudán del Sur.

B. Vigilancia e investigación de las violaciones de los derechos humanos

53. La UNMISS documentó un total de 264 incidentes, entre ellos asesinatos arbitrarios, secuestros, actos de violencia sexual relacionada con los conflictos, detenciones y reclusiones arbitrarias (incluidas algunas que se habían llevado a cabo a petición de terceros), torturas y malos tratos, reclutamientos militares forzados y saqueo y destrucción de bienes civiles. Los incidentes provocaron al menos 870 víctimas civiles (529 muertos y 341 heridos), entre ellas al menos 50 mujeres y 34 niños y niñas. De esos incidentes, 184 se atribuyeron a milicias de carácter comunitario y grupos civiles de defensa; 28, a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur; 20, al Frente de Salvación Nacional; 15, al M/ELPS-O; 6, al Servicio Nacional de Seguridad; 3, a individuos leales al General de División James Nando, afiliado a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur; 1, a las Fuerzas de Apoyo Rápido del Sudán; 1, y a la facción de Malik Agar del M/ELPS-N; y 1, a los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y elementos del M/ELPS-O leales al General de Brigada Santo Ali. Quedó pendiente la atribución de otros dos incidentes.

54. Como resultado de la participación generalizada de milicias comunitarias o grupos de defensa civil fuertemente armados, apoyados en algunas circunstancias por fuerzas organizadas, la violencia entre comunidades siguió teniendo consecuencias devastadoras para las poblaciones locales, con un saldo de al menos 488 muertos y 312 heridos. La prolongada violencia en Yonglei y la Zona Administrativa de Pibor entre los miembros de la comunidad murle, por una parte, y los aliados dinka bor y gawaar/lou nuer, por otra, representó el 30 % (132 muertos y 125 heridos) de las bajas civiles.

55. El 12 de junio, el Presidente emitió una orden ejecutiva para la reasignación y el ascenso de 12 altos comandantes de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur al alto mando militar en Yuba, entre ellos los de seis personas identificadas previamente en las investigaciones de la División de Derechos Humanos de la UNMISS como implicadas en graves violaciones de los derechos humanos. Dos de estas personas están también incluidas en la lista de sanciones de las Naciones Unidas. En julio, al menos dos personas presuntamente implicadas en graves violaciones de los derechos humanos fueron nombradas gobernadores. Estos nombramientos son indicativos de una grave falta de voluntad política para exigir responsabilidades a los presuntos autores de violaciones de los derechos humanos, en particular a aquellos de quienes se sabe que tienen responsabilidad de mando.

56. En el contexto de la COVID-19, el derecho a la salud siguió viéndose restringido: son muchos los informes de personas aquejadas de diversas enfermedades, incluida la COVID-19, a las que se denegó tratamiento médico debido

a la estigmatización y al temor a la infección por parte de los trabajadores de la salud, en ausencia de equipos de protección personal adecuados.

57. La UNMISS siguió recibiendo denuncias de censura, acoso y detención y reclusión arbitrarias de periodistas, activistas y otros civiles que expresaban opiniones disidentes o críticas al Gobierno por parte del Servicio Nacional de Seguridad. En junio, por ejemplo, miembros del Servicio Nacional de Seguridad arrestaron y detuvieron arbitrariamente a un activista de la sociedad civil durante varios días en relación con una campaña de sensibilización pública en la que se pedía transparencia y rendición de cuentas en relación con el gasto público.

58. La UNMISS acogió con agrado la decisión del Tribunal de Apelaciones de Sudán del Sur de anular la pena de muerte de un menor condenado en noviembre de 2017 por un asesinato cometido cuando el acusado tenía 15 años. Sin embargo, dos reclusos fueron ejecutados en julio en la Prisión Central de Yuba, y el Tribunal Supremo decidió de forma repentina y sin explicación condenar a un recluso sentenciado por un tribunal de primera instancia a reclusión a perpetuidad, sin posibilidad de recurrir la decisión.

59. A pesar del clima general de impunidad, la UNMISS documentó cuatro decisiones judiciales por las que se condenó a siete miembros de las fuerzas de seguridad a penas de prisión por delitos graves, entre ellos la violencia sexual.

60. La UNMISS llevó a cabo nueve evaluaciones de riesgos de la política de diligencia debida en materia de derechos humanos antes de que se proporcionara asistencia material y para gastos de viaje a las fuerzas de seguridad no pertenecientes a las Naciones Unidas en apoyo de la aplicación del proceso de paz.

Protección infantil

61. El número de niños afectados por violaciones graves ha aumentado, pasando de 32 en el período cubierto por el informe anterior a 55 (46 varones y 9 niñas). El aumento se atribuye principalmente a la verificación tardía del número de niños afectados por el reclutamiento y la utilización durante los incidentes ocurridos en 2018 y 2019.

62. Se verificó que un total de 37 niños habían sido víctimas de reclutamiento y utilización, y que siete niñas eran supervivientes de siete casos de violación; tres niños (2 varones y una niña) fueron asesinados, y dos niños varones resultaron heridos. Además, se verificaron dos ataques contra establecimientos sanitarios y un incidente de denegación del acceso humanitario. Hubo niños afectados en Ecuatoria Central (25 niños y 1 niña), Ecuatoria Occidental (4 varones y 1 niña), Alto Nilo (14 varones y 1 niña), Bahr el-Ghazal Occidental (2 varones y 1 niña) y Unidad (1 niño).

63. Las vulneraciones del M/ELPS-O afectaron a 43 niños (37 varones y 6 niñas); las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur cometieron violaciones que afectaron a 2 niñas y el Frente de Salvación Nacional cometieron violaciones que afectaron a 8 niños (7 varones y 1 niña). Quedaron sin atribuir las vulneraciones que afectaron a dos varones, ya que resultaron heridos por restos explosivos de guerra. Los dos ataques contra centros de salud se atribuyeron al Frente de Salvación Nacional, mientras que el incidente sobre la denegación de acceso humanitario sigue pendiente de atribución.

64. A pesar de los problemas relacionados con la COVID-19, la UNMISS organizó 13 sesiones de sensibilización sobre la protección de los niños para 202 miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos 107 miembros del M/ELPS-O, 79 miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales, 13 oficiales de las fuerzas unificadas necesarias y 3 oficiales de la Alianza de Oposición de Sudán del Sur. Además, 97

miembros de la comunidad (94 hombres y 3 mujeres) y 37 funcionarios públicos (33 hombres y 4 mujeres) se beneficiaron de las actividades de sensibilización.

65. El equipo de tareas sobre vigilancia y presentación de informes en el país sobre las infracciones cometidas contra los niños en los conflictos armados comenzó a prestar apoyo al establecimiento de comités técnicos de alto nivel a nivel ministerial y nacional, que serán las principales estructuras de supervisión encargadas de la aplicación del plan de acción recientemente firmado con el que se pretenden prevenir todas las graves violaciones contra los niños perpetradas por las fuerzas y grupos armados en Sudán del Sur.

La violencia sexual relacionada con los conflictos

66. Pese a la disminución general de la violencia política, la violencia sexual relacionada con los conflictos siguió siendo frecuente y las partes en el conflicto, las milicias de base comunitaria y otros elementos perpetraron este tipo de actos aprovechando la prolongada situación de inseguridad y la falta de protección por parte de las autoridades. La UNMISS verificó 21 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron a 29 supervivientes, entre ellos 7 niñas y 2 hombres. Las víctimas fueron sometidas a violaciones (11), violaciones en grupo (8), matrimonios forzados (5), desnudez forzada (2), esclavitud sexual (1) e intentos de violación (2). Entre las víctimas se contaban niñas de apenas diez años de edad, así como tres mujeres embarazadas o lactantes y un menor con discapacidad mental. Al menos 20 supervivientes recibieron asistencia médica. Los incidentes fueron atribuidos a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (7), el M/ELPS-O (3), las milicias comunitarias (3), el Servicio de Seguridad Nacional, (2), el Frente de Salvación Nacional (1) y fuerzas bajo el mando del general de división Daniel Dongo (1). Hubo dos incidentes respecto de los cuales, en el momento de la presentación del informe, no se había podido determinar de forma concluyente la afiliación de los autores.

67. La UNMISS documentó otros ocho incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos que tuvieron lugar antes del período sobre el que se informa, con ocho supervivientes, entre ellos tres niñas. Los incidentes fueron atribuidos a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (5), el Servicio de Seguridad Nacional (1) y las milicias comunitarias (1), mientras que un incidente sigue pendiente de atribución.

68. Un comandante del M/ELPS-O presuntamente implicado en continuados delitos de violencia sexual relacionada con los conflictos, incluida la esclavitud sexual, que se documentaron en un informe público presentado conjuntamente por la UNMISS y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2018, fue nombrado gobernador del estado de Ecuatoria Occidental. La Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos sigue abogando por la liberación de las mujeres y las niñas secuestradas.

69. El 19 de junio, con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, el Consejo de Iglesias de Sudán del Sur emitió una declaración en la que instaba a las partes en el conflicto y a las milicias comunitarias a poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos. Además, el Consejo expresó su preocupación por el hecho de que las milicias recurriesen a esta violencia para resolver las controversias, mediante el secuestro de mujeres y niños, el matrimonio forzado y las violaciones, en estados como Yonglei y Warrap. Los líderes de las iglesias hicieron un llamamiento para que se liberase a las mujeres y niñas secuestradas y se prestasen servicios integrales y libres de estigmas a todos los supervivientes. La Misión y sus asociados examinaron cuestiones relacionadas con la

promoción y con la rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con los conflictos mediante programas de radio en todo Sudán del Sur.

70. En lo que constituye un paso positivo hacia la rendición de cuentas, en junio, los tribunales civiles de Kuayok (Warrap) y Wau (Bahr el-Ghazal Occidental), declararon a un soldado de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur y a un oficial del Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur, respectivamente, culpables de delitos de violencia sexual relacionada con los conflictos cometidos contra niños, condenándolos a penas de entre cinco y diez años de prisión y ordenando el pago de daños y perjuicios a las familias de los supervivientes. En julio, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur establecieron un consejo de guerra en Yei para juzgar a los soldados acusados de violencia sexual relacionada con los conflictos y otras violaciones graves de los derechos humanos. El tribunal procesa en la actualidad al menos a 13 presuntos autores de nueve violaciones y dos violaciones en grupo que afectaron a 11 víctimas. Sin embargo, la legislación nacional dispone que la jurisdicción sobre los delitos perpetrados contra civiles corresponde a los tribunales civiles.

C. Creación de condiciones propicias para la prestación de asistencia humanitaria

71. Como parte de su continuado apoyo a los asociados humanitarios, la UNMISS realizó 99 patrullas de larga duración y 784 de corta duración en todo el país, a fin de apoyar la prestación de asistencia o la protección de los trabajadores humanitarios, inclusive mediante el establecimiento de bases temporales de operaciones.

72. La UNMISS proporcionó protección de la fuerza a 169 misiones integradas, lo que permitió el acceso a zonas de alto riesgo. También llevó a cabo 967 patrullas de protección de la fuerza en apoyo de convoyes y asociados humanitarios, incluidos los de ONG.

73. El Servicio de Actividades relativas a las Minas respondió a las solicitudes de organizaciones humanitarias en Ecuatoria Central, Alto Nilo y Bahr el-Ghazal Occidental relativas a la inspección y la retirada de municiones explosivas. A petición de las autoridades de Malakal, en la región del Alto Nilo, se llevó a cabo la evaluación de un posible cementerio y de una carretera de acceso, en previsión de las muertes relacionadas con la COVID-19.

74. El Servicio de Actividades relativas a las Minas desplegó 20 equipos, que inspeccionaron 586.683 m² de terreno, incluidas infraestructuras civiles, y aprobaron el acceso de las comunidades locales para su uso productivo y destruyeron 8.402 artefactos explosivos y 304.589 cartuchos de munición para armas pequeñas.

D. Apoyo a la aplicación del Acuerdo Revitalizado y al proceso de paz

75. Mi Representante Especial y los Representantes Especiales Adjuntos siguieron desarrollando sus buenos oficios en apoyo del proceso de paz, incluida la aplicación del Acuerdo Revitalizado, mediante un contacto continuado con altos funcionarios del Gobierno, líderes de la oposición y asociados regionales. La UNMISS apoyó la puesta en marcha de un programa para el Foro de Partidos Políticos a fin de mejorar las competencias de los representantes en materia de elaboración de políticas organizativas.

76. La UNMISS amplió iniciativas anteriores para poner en práctica enfoques innovadores de colaboración con asociados e interesados. La Misión organizó varias mesas redondas políticas en Radio Miraya con las que se facilitó el diálogo y se

redujeron las distancias entre el público y los dirigentes políticos. Esos debates permitieron a la Misión difundir mensajes coherentes, así como presionar al mismo tiempo de forma sostenida en apoyo de la aplicación del acuerdo de paz, incluida la necesidad de abordar las tareas pendientes e intervenir con decisión para plantar cara a la creciente violencia entre comunidades, que puede dar al traste con los dividendos de la paz.

77. Mis Representantes Especiales participaron en la 36ª Asamblea Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la IGAD, en la que prestaron el apoyo constante de las Naciones Unidas a Sudán del Sur y a los esfuerzos de la IGAD para hacer frente a los problemas que plantea la pandemia de COVID-19.

E. Las mujeres y la paz y la seguridad

78. La UNMISS siguió abogando por el cumplimiento de la cuota mínima de mujeres en todas las instituciones de gobierno, como parte de la estrategia de la Misión en materia de género y las mujeres y la paz y la seguridad. Aprovechando el proceso de nombramiento de gobernadores, la Misión colaboró activamente con mujeres consolidadoras de la paz en apoyo de los esfuerzos por promover el nombramiento de mujeres en cargos gubernamentales locales. La Misión prestó apoyo técnico para elaborar directorios a nivel de los estados de mujeres líderes que aspiran a ocupar cargos decisivos públicos.

79. La UNMISS siguió prestando asistencia técnica y servicios de asesoramiento a los equipos de tareas de rango estatal para atender las preocupaciones de las mujeres que corren un alto riesgo de exposición a la COVID-19. En respuesta al aumento del número de casos de violencia sexual y de género, la UNMISS colaboró con el Subgrupo de Violencia de Género para determinar las zonas de alto riesgo en las que desplegar patrullas y misiones integradas sobre el terreno para garantizar un entorno seguro.

80. Debido a las restricciones relacionadas con la enfermedad por coronavirus, las oportunidades de contacto y colaboración directa con mujeres consolidadoras de la paz y líderes siguieron siendo limitadas. No obstante, la Misión organizó a través de Internet una serie de encuentros con las principales dirigentes de organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

VI. Dotación de personal de la Misión, situación del despliegue y asuntos relacionados con la conducta y la disciplina

81. Al 20 de agosto, la dotación de personal civil de la UNMISS ascendía a 2.649 funcionarios, a saber: 874 de contratación internacional (242 mujeres, o el 27 %), 1.385 de contratación nacional (197 mujeres, o el 14 %) y 390 Voluntarios de las Naciones Unidas (154 mujeres, o el 39 %).

82. La dotación de la policía ascendía a 1.824 agentes de un total de 2.101 agentes autorizados, a saber: 611 agentes de policía no pertenecientes a una unidad constituida (184 mujeres, o el 31 %), 1.143 agentes de las unidades de policía constituidas (216 mujeres, o el 18 %) y 70 oficiales penitenciarios (16 mujeres, o el 22 %).

83. De los 17.000 efectivos autorizados, la UNMISS contaba con 14.528 efectivos, a saber: 192 oficiales de enlace militar (31 mujeres, o el 16 %), 363 oficiales de Estado Mayor (62 mujeres, o el 17 %) y 13.973 efectivos de contingentes militares (665 mujeres, o el 4 %).

84. Las medidas relacionadas con la COVID-19 afectaron a los esfuerzos de la Misión por aplicar la estrategia triple (prevención, aplicación de las normas y medidas correctivas) para hacer frente a posibles conductas indebidas. La reducción del número de personal civil recién incorporado y la suspensión temporal de las rotaciones de los componentes militares y de policía provocaron que disminuyeran las necesidades de capacitación. A pesar de ello, la Misión se centró en mejorar la tasa de cumplimiento de capacitación obligatoria en línea sobre las normas de conducta de las Naciones Unidas, incluida la prevención de la explotación y los abusos sexuales. Además, la Misión proporcionó capacitación directa e indirecta a través de Internet a 4.407 efectivos uniformados.

85. La UNMISS siguió manteniendo contactos con los responsables del mecanismo de denuncia de base comunitaria y los Puntos Focales de Conducta y Disciplina en lugares de destino fuera de la sede, y veló por el suministro de material de divulgación. Se organizaron encuentros a través de Internet con los Jefes de Oficinas sobre el Terreno, los Sindicatos del Personal del Cuadro del Servicio Móvil y las asociaciones nacionales del personal en relación con diversas cuestiones de conducta y disciplina. La Misión se mantuvo en contacto con el Equipo Nacional de Trabajo sobre la prevención de la explotación y los abusos sexuales.

86. De conformidad con las normas aplicables, toda la información sobre conductas indebidas se procesó oportunamente. Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto, se registraron diez denuncias en el Sistema de Seguimiento de las Faltas de Conducta, incluida una denuncia de explotación y abusos sexuales. Todas las víctimas identificadas de explotación y abusos sexuales siguieron recibiendo apoyo de la Oficial Superior de Derechos de las Víctimas de la Misión en Sudán del Sur.

VII. Violaciones del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, el derecho internacional humanitario y la seguridad del personal de las Naciones Unidas

87. Al 31 de agosto, la UNMISS había registrado 36 violaciones del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, en comparación con las 64 registradas en el período anterior. De esas violaciones, 23 consistieron en restricciones a la circulación impuestas por el Gobierno, con las que se obstaculizó el cumplimiento del mandato por parte de la Misión.

88. El Gobierno impuso restricciones a los bienes y equipos importados por la UNMISS, incluidas las raciones y el combustible. A finales de julio, se impidió la entrada al país de 46 camiones contratados por la UNMISS. Tras las negociaciones, se permitió la entrada de los camiones; en agosto, sin embargo, la UNMISS encontró trabas similares. El Gobierno siguió retrasando indebidamente las autorizaciones para la importación de equipo indispensable, entre el que se incluyen armas y municiones, pese a haberse solicitado con antelación.

89. Las patrullas de la Misión siguieron teniendo que hacer frente a denegaciones de acceso en todo el país. En particular, el 19 de julio, efectivos de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur y del Servicio de Seguridad Nacional presentes en el puesto de control del río Jur, en las afueras de Wau, bloquearon el paso de una fuerza de reacción rápida de la UNMISS, movilizada para rescatar a dos miembros del personal de la Organización Internacional para las Migraciones que habían sufrido la emboscada de pistoleros desconocidos.

90. Sigue sin conocerse el paradero de dos funcionarios de contratación nacional detenidos en 2014. El Gobierno no ha dado a la UNMISS acceso a estas personas ni

le ha facilitado información sobre su situación, a pesar de las solicitudes que se hacen periódicamente. La UNMISS registró dos nuevos arrestos y detenciones de personal de la Misión por parte del Gobierno, que afectaron a dos funcionarios de contratación nacional. Ambos fueron puestos en libertad tras permanecer detenidos por períodos que oscilaron entre unas horas y unos días.

91. El Gobierno siguió imponiendo rigurosas condiciones a la concesión de visados de entrada en Sudán del Sur para el personal uniformado de la UNMISS recientemente desplegado. Si bien en fecha reciente se ha avanzado en la tramitación del cúmulo de solicitudes de visado pendientes para el personal uniformado no perteneciente a los contingentes ni a las unidades constituidas de la UNMISS, las demoras anteriores y las estrictas condiciones impuestas por el Gobierno repercutieron negativamente en las actividades de la UNMISS.

92. La UNMISS registró dos incidentes de intromisión en la ejecución de las tareas encomendadas a la Misión. El 16 de junio, jóvenes armados de Yonglei impusieron una zona de exclusión aérea sobre la Zona Administrativa de Pibor con efecto inmediato hasta nuevo aviso. La restricción afectaba a todas las aeronaves de socorro, comerciales y militares de las Naciones Unidas que entraban y salían de la Zona Administrativa de Pibor. El 18 de junio, un grupo de jóvenes murles de Gumuruk amenazó con derribar cualquier aeronave de la UNMISS que sobrevolase la Zona Administrativa de Pibor, debido a los rumores de que la Misión estaba suministrando armas y municiones a las comunidades dinka y gawaar nuer.

93. La UNMISS sigue notificando las violaciones al Gobierno por medio de notas verbales y de contactos periódicos. También se comparte con el Gobierno una matriz mensual de los incidentes preparada para el Consejo de Seguridad.

VIII. Evaluación del rendimiento de los componentes uniformados

94. Se llevó a cabo la evaluación de dos batallones de infantería, en particular sobre comprensión y apoyo del mandato, cuestiones de mando y control, el adiestramiento y la disciplina y la logística y la salud. Uno de los batallones obtuvo la calificación de “excelente” en todas las dimensiones, mientras que el otro fue calificado como “superior a la media” en general. Se recomendó que una de las unidades mejorara su capacidad lingüística. Debido a la pandemia, no fue posible evaluar a varias unidades como estaba previsto.

95. Se evaluaron cinco unidades de policía constituidas en particular sobre la comprensión del mandato, el mando y el control, la protección de los civiles, la logística, la capacitación, la conducta y disciplina y la salud. Aunque todas las unidades fueron calificadas como satisfactorias en general, en cuatro de ellas se identificaron deficiencias en logística. Se estableció un plan de mejora de la actuación para cada unidad, y los progresos se supervisan mediante el proceso de evaluación trimestral.

IX. Observaciones y recomendaciones

96. Me preocupa profundamente la escalada de la violencia entre comunidades en todo Sudán del Sur, en particular en Yonglei, Lagos, Warrap, Unidad y Bahr el-Ghazal Occidental. La disponibilidad de armas y la creciente implicación de personal uniformado armado han amplificado la naturaleza y la escala de lo que otrora eran conflictos locales. No podemos seguir considerando esta violencia como un mero enfrentamiento local entre comunidades. Resulta imperativo poner fin a este ciclo de

violencia e impunidad que sigue alimentando graves violaciones de los derechos humanos en las que los civiles, en particular las mujeres y los niños y niñas, suelen ser los más afectados. A este respecto, la decisión del Presidente de nombrar un comité de alto nivel para abordar la situación en Yonglei y la Zona Administrativa de Pibor es un paso en la dirección correcta, y puede tener por seguro que la UNMISS y los asociados de las Naciones Unidas prestarán su apoyo para facilitar la labor de ese comité. Me preocupan también los informes sobre el aumento en el número de casos de violencia sexual y por razón de género y la impunidad conexas, y espero que la Asamblea Legislativa Nacional de Transición se reconstituya cuanto antes y que se examine el proyecto de ley contra la violencia por razón de género tan pronto como sea posible. Aun cuando los esfuerzos del Gobierno por garantizar la rendición de cuentas por la comisión de delitos graves son merecedores de encomio, cabe alentar al Gobierno a que adopte medidas que impidan la ejecución de la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluso a través de una moratoria y de conmutaciones.

97. La confluencia de la persistente violencia entre comunidades, la pandemia y las inundaciones estacionales por segundo año consecutivo en algunas regiones ha exacerbado una situación humanitaria ya de por sí extrema. Los niveles de violencia sin precedentes en la región de Yonglei, por ejemplo, han dejado cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. Por consiguiente, insto al Gobierno y a los asociados internacionales a que sigan apoyando las actividades de socorro y aborden las causas subyacentes del conflicto para aliviar el sufrimiento del pueblo de Sudán del Sur.

98. Estoy alarmado por los esfuerzos de desarme de la población civil desarrollados por las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur en Tonj, que han dado pie a violencia contra los civiles, muertes, desplazamientos y saqueos de infraestructuras públicas y económicas esenciales. Por consiguiente, insto al Gobierno a que aplique de manera sustantiva el Acuerdo Revitalizado, incluidas las disposiciones de reforma del sector de la seguridad.

99. Observo que el alto el fuego entre las partes en el Acuerdo Revitalizado sigue vigente. Sin embargo, las partes no deben bajar la guardia, so pena de que la violencia generalizada entre comunidades desbarate rápidamente los avances. En la misma línea, la continua tensión entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur y el M/ELPS-O, por un lado, y el Frente de Salvación Nacional, por otro, sigue siendo preocupante. Insto a las partes a que se atengan a la Declaración de Roma sobre el Proceso de Paz en Sudán del Sur y a que tomen medidas concretas para fomentar la confianza.

100. Si bien celebro los progresos realizados por las partes en cuanto a la asignación de los estados y el nombramiento de nueve gobernadores, es de lamentar que la reconstitución de la asamblea nacional de transición siga en punto muerto, al igual que el nombramiento del gobernador del estado del Alto Nilo y la formación de las restantes instituciones de gobierno estatales. El Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado debe actuar unido para resolver las cuestiones pendientes, a fin de garantizar un progreso deliberado y sustantivo hacia la plena aplicación del Acuerdo, en particular la cuota del 35 % de participación y representación de las mujeres en el Gobierno.

101. En Sudán del Sur hay más de 1,6 millones de desplazados internos, y 2,2 millones de personas han buscado refugio en los países vecinos, mientras que aproximadamente 6,5 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. El apoyo de los asociados internacionales sigue siendo vital para estabilizar la situación a través del plan de respuesta humanitaria. Al 21 de agosto, se habían asegurado 617 de los 1.900 millones de dólares solicitados para el Plan de Respuesta Humanitaria.

Insto a la comunidad de donantes a que siga contribuyendo generosamente para colmar esas carencias.

102. Condeno enérgicamente los ataques que el personal de mantenimiento de la paz y los trabajadores humanitarios siguen sufriendo mientras sirven al pueblo de Sudán del Sur. El asesinato de un trabajador humanitario en Lagos durante el ataque a una ambulancia claramente identificada y el asesinato de otros dos trabajadores humanitarios que proporcionaban servicios de atención sanitaria y nutrición a miembros de la comunidad en la ciudad de Pajut, en Yonglei, son inaceptables. Exhorto al Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado a investigar sin demora esos incidentes y a poner a los culpables a disposición de la justicia.

103. También exhorto a las autoridades a que eliminen con carácter urgente las restricciones de entrada y acceso y otros impedimentos impuestos a las operaciones de la Misión y los asociados humanitarios. Esas demoras afectan negativamente a las operaciones y la capacidad de la UNMISS, así como a la movilidad de su personal y, en general, a la respuesta que pueden ofrecer a necesidades vitales y urgentes.

104. Las medidas de respuesta a la COVID-19 siguen exacerbando las desigualdades y plantean un desafío para la infraestructura del país, en particular los sistemas de salud. La UNMISS está prestando apoyo a Sudán del Sur en su respuesta a la pandemia mundial y, al mismo tiempo, apoya a las autoridades nacionales y de los estados de forma que puedan mejorar su capacidad médica, a fin de reducir las tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles. Las Naciones Unidas seguirán apoyando a Sudán del Sur en estos tiempos difíciles.

105. Reitero mi reconocimiento del papel fundamental y la influencia que desempeñan los asociados regionales, los cuales, pese a tener que hacer frente a los desafíos específicos que la pandemia ha interpuesto en su camino, se mantienen firmes en su compromiso de apoyar a Sudán del Sur en su camino hacia una paz duradera. A este respecto, acojo con satisfacción la reciente reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la IGAD, en la que los dirigentes regionales dieron un nuevo impulso a la aplicación del Acuerdo Revitalizado. Expreso mi agradecimiento a los Jefes de Estado y de Gobierno de la IGAD, e insto al Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado a que aproveche este apoyo de la región para acelerar la aplicación del acuerdo. También renuevo mi llamamiento para que se proceda sin demora al nombramiento de la Presidencia de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida.

106. Respaldo los esfuerzos de la UNMISS por ajustar gradualmente la postura de la fuerza a la luz de los cambios en el contexto operativo, como han confirmado las evaluaciones de los riesgos para la seguridad de los emplazamientos de protección de civiles de Bor y Wau, en los que se indicaba que ya no existen amenazas externas para la integridad física de los desplazados internos que viven en esos emplazamientos. El cambio gradual, que debería culminar con la redenominación de esos emplazamientos, ha permitido a la Misión mejorar su eficiencia y aumentar su huella protectora más allá de los emplazamientos de protección de civiles mediante el red despliegue de fuerzas y la ampliación de la zona que cubren sus patrullas y la penetración de estas, a través de una postura más móvil y ágil. La UNMISS continuará la iniciativa en concierto con los representantes de los desplazados internos, los asociados humanitarios y las autoridades de los estados.

107. Por último, transmito mi profundo agradecimiento al personal uniformado y civil de la UNMISS y a mi Representante Especial, David Shearer, los cuales, pese a los desafíos que plantea la pandemia, persisten incansables en sus esfuerzos por cumplir el mandato de las Naciones Unidas en relación con Sudán del Sur. Doy las gracias también a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía. Le estoy

muy agradecido asimismo al equipo de las Naciones Unidas en el país y a los asociados humanitarios por la vital asistencia que prestan en todo el país, a menudo en entornos inseguros. Por último, reconozco los esfuerzos indispensables de los Jefes de Estado y de Gobierno de la IGAD; del Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat; del Secretario Ejecutivo de la IGAD, Workneh Gebeyehu; del Enviado Especial de la IGAD, Ismail Wais; y de la Comunidad de Sant'Egidio por garantizar la paz en Sudán del Sur.

